

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO: 931
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2018-00108-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: NELSON CRISTOBAL RAMOS MARTÍNEZ
DEMANDADA: LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL
ASUNTO: Citación funcionario entrega prueba con reserva legal

Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Mediante auto interlocutorio No. 007 del 1 de febrero de 2022 y auto de sustanciación No. 409 del 5 de julio de 2022 se requirió por última vez a la Dirección de Personal del Ejército Nacional (fls. 1148 y 1459) para que allegara, entre otras pruebas, la decretada “... en calidad de préstamo, folios de vida originales de los años 2002 a 2003”.

Mediante oficio No. 2022313001561731: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.9 del 22 de julio 2022, la Sección Jurídica de la Dirección de Personal del Ejército Nacional manifestó lo siguiente:

“(...) para dar trámite al requerimiento efectuado por el juzgado era indispensable el cumplimiento de los protocolos de seguridad como la cadena de custodia, por tal motivo si lo que requiere es realizar práctica de estudio grafológico al folio de vida del señor MY. NELSON CRISTÓBAL RAMOS MARTÍNEZ, para la realización de referido estudio y teniendo en cuenta lo estipulado en los artículos 165, 226, y 275 del Código General del Proceso que trata de los medio de prueba, procedencia de la prueba pericial y la procedencia por informe de la prueba pericial, se autoriza la entrega de folios de vida previa Cadena de Custodia y acta de compromiso de entrega a un funcionario de Despacho Judicial o Ente investigador comisionado, para que se acerque a la sección de historias laborales de la Dirección de Personal del Ejército Nacional ubicada en la Carrera 46 No. 20 B-99, Cantón Occidental “Francisco José de Caldas”, Edificio Comando de Personal, con el fin de suscribir los documentos acorde a los parámetros legales de conformidad a la prueba que pretenden practicar según su solicitud (...)”.

De conformidad con el artículo 27 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), *el carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que, siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo.*

La Ley Estatutaria 1621 de 2013, “*Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones*”, en sus artículos 33 y siguientes, consagra la naturaleza reservada de la información de inteligencia y contrainteligencia, el régimen aplicable a dicha información, el trámite que debe surtir para suministrarla y las excepciones a tal reserva.

“ARTÍCULO 33. RESERVA. Por la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y contrainteligencia, sus documentos, información y elementos técnicos

estarán amparados por la reserva legal por un término máximo de treinta (30) años contados a partir de la recolección de la información y tendrán carácter de información reservada (...).

PARÁGRAFO 2. El organismo de inteligencia que decida ampararse en la reserva para no suministrar una información que tenga este carácter, debe hacerlo por escrito, y por intermedio de su director, quien motivará por escrito la razonabilidad y proporcionalidad de su decisión y la fundará en esta disposición legal. En cualquier caso, frente a tales decisiones procederán los recursos y acciones legales y constitucionales del caso”.

“ARTÍCULO 34. INOPONIBILIDAD DE LA RESERVA. El carácter reservado de los documentos de inteligencia y contrainteligencia no será oponible a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, siempre que su difusión no ponga en riesgo la seguridad o la defensa nacional, ni la integridad personal de los ciudadanos, los agentes, o las fuentes. Corresponderá a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo establecido en el presente artículo”.

“ARTÍCULO 38. COMPROMISO DE RESERVA. Los servidores públicos de los organismos que desarrollen actividades de inteligencia y contrainteligencia, los funcionarios que adelanten actividades de control, supervisión y revisión de documentos o bases de datos de inteligencia y contrainteligencia, y los receptores de productos de inteligencia, se encuentran obligados a suscribir acta de compromiso de reserva en relación con la información de que tengan conocimiento. Quienes indebidamente divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, empleen o permitan que alguien emplee la información o documentos reservados, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar (...).”.

“ARTÍCULO 39. EXCEPCIÓN A LOS DEBERES DE DENUNCIA Y DECLARACIÓN. Los servidores públicos de los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia están obligados a guardar la reserva en todo aquello que por razón del ejercicio de sus actividades hayan visto, oído o comprendido. En este sentido, los servidores públicos a los que se refiere este artículo están exonerados del deber de denuncia y no podrán ser obligados a declarar. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 3o y 4o del artículo 18 y del parágrafo 3o del artículo 33 (...).

Cuando los servidores públicos a que se refiere este artículo deban denunciar o rendir testimonio, el juez o el fiscal según el caso, podrán disponer que la diligencia respectiva se reciba en forma privada y se mantenga en reserva mientras ello sea necesario para asegurar la vida e integridad personal del funcionario y la de su familia”.

Sobre este tema, la sentencia C-540/12 de la Corte Constitucional, mediante la cual realizó el control automático de constitucionalidad de la Ley 1521 de 2013, concluyó:

“En relación con el carácter reservado de los documentos de inteligencia y contrainteligencia, en el proyecto se prevé que no será oponible a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, siempre que su difusión no ponga en riesgo la seguridad o la defensa nacional, ni la integridad personal de los ciudadanos, los agentes, o las fuentes, correspondiendo a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos e informes que lleguen a conocer en desarrollo de lo establecido en el presente artículo, no encontrando la Corte reparo alguno de constitucionalidad, en tanto se entienda que la expresión ‘siempre que su difusión no ponga en riesgo la seguridad o la defensa nacional, ni la integridad personal de los ciudadanos, los agentes, o las fuentes’, no opera respecto a violaciones de derechos humanos o al derecho internacional humanitario.

La Corte no le encuentra reparo de constitucionalidad a la norma que, en términos generales, busca salvaguardar la necesaria reserva de la información de inteligencia y contrainteligencia, estableciendo compromisos de reserva y responsabilidades disciplinarias y penales, instituyendo quienes están obligados a suscribir actas de compromiso de reserva en relación con la información de que tengan conocimiento, ya que al comprender el manejo de información que envuelve caros intereses para el Estado como la seguridad y defensa de la Nación, es comprensible que el legislador se hubiere preocupado por establecer mecanismos que busquen salvaguardar la necesaria reserva en la materia”.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2017, M.P. César Palomino Cortés, sobre el mismo tópico, indicó:

“7. Los documentos sujetos a reserva que pueden servir de fundamento para adoptar decisiones de retiro del personal militar.

La decisión de la administración para desvincular a un integrante de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional debe estar sustentada en razones del servicio, las cuales, cuando se trata de retiro discrecional o por voluntad del Gobierno Nacional o del Director General de la Policía Nacional, el fundamento de la actuación de la administración radica en las actas de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva, para los Suboficiales; o, del Comité de Evaluación, cuando se trata de Oficiales o Suboficiales de las Fuerzas Militares, cuyos organismos se encargan de valorar la trayectoria profesional del militar o Policía, a través de un estudio que se realiza de la hoja de vida y otros documentos que puedan estar sujetos a reserva legal, como son los informes elaborados por los organismos de inteligencia y contrainteligencia, que conforman el expediente profesional del servidor público.

La Corte Constitucional, en sentencia C-179 de 2006, al analizar el artículo 4 de la Ley 857 de 2003 y el artículo 104 del Decreto Ley 1790 de 2000, que establece el retiro por razones del servicio en forma discrecional tanto de los miembros de la Policía como de las Fuerzas Militares, previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, de la Junta de Evaluación y Clasificación o del Comité de Evaluación de Oficiales o Suboficiales de las Fuerzas Militares, precisó que esta facultad discrecional no puede ser confundida con la arbitrariedad en la toma de la decisión de retiro. Al respecto dijo:

‘Nótese que es la ley la que enmarca los elementos en que puede ser ejercida la potestad discrecional para el retiro de miembros de la Fuerza Pública, a saber: i) la existencia misma de la potestad; ii) la competencia para ejercerla respecto de unos miembros determinados; y iii) la obtención de una finalidad específica. No se trata pues de una discrecionalidad al margen de la ley, sino todo lo contrario, es precisamente en virtud de la ley, y en la medida en que ella dispone que puede ser ejercida la potestad discrecional’¹.

En ese sentido, como la decisión de retiro de un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Militares debe estar precedida del concepto de una Junta o Comité de Evaluación y Clasificación, en el caso indicado por la ley, la jurisprudencia constitucional ha entendido que esta recomendación debe estar sustentada en elementos de juicio objetivos y razonables que permita justificar el retiro del funcionario de la institución. Sobre este aspecto, la Corte señaló:

‘En ese orden de ideas, la recomendación que formulen tanto el Comité de Evaluación para las Fuerzas Militares, como la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de la Junta de Evaluación o Clasificación respectiva para los Suboficiales, debe estar precedida y sustentada en un examen de fondo, completo y preciso de los cargos que se invocan para el retiro de miembros de esas instituciones, en las pruebas que se alleguen, y en fin todos los elementos objetivos y razonables que permitan sugerir el retiro o no del servicio de un funcionario’².

Esta interpretación es igualmente aplicable a las causales de retiro contempladas en los artículos 555 y 626 del Decreto ley 1791 de 2000, decreto invocado por la accionada en su contestación y que hace relación específicamente a los miembros de la Policía Nacional.

Puede ocurrir que el retiro discrecional del servicio tenga sustento en informes de carácter reservado. En estos casos, para establecer si el retiro discrecional con base en información reservada vulnera o no el debido proceso, debe tenerse en cuenta si el afectado puede conocer los motivos y tener así la oportunidad de controvertirlos ante la misma Junta. El informe es reservado frente a terceros, pero no ante el eventual afectado, salvo que las circunstancias indiquen mantener excepcionalmente la reserva. Sobre este punto la Corte ha manifestado lo siguiente:

De acuerdo con las consideraciones realizadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la providencia cuestionada, la Sala estima necesario precisar lo siguiente:

El numeral tercero del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 señala que, tendrán el carácter de reservado las informaciones y documentos que ‘involucren derechos a la privacidad e

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-179 del 8 de marzo de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra

² Corte Constitucional, Sentencia C-179 del 8 de marzo de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra

intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica' (...).

Los anteriores preceptos normativos, permiten advertir que los documentos o informaciones derivadas de actividades de inteligencia y contrainteligencia militar tiene un carácter reservado, pero si esta información hace parte de la hoja de vida o el historial laboral de una persona, ello comporta una doble condición de reserva, que impiden a la entidad pública que almacena estos datos, su divulgación abierta.

Sin embargo, el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 indica que: 'Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información'.

Acorde con las precitadas disposiciones legales y la jurisprudencia de las altas cortes, es claro que la prueba documental solicitada a la Sección de Historias Laborales de la Dirección de Personal del Ejército Nacional, relacionada con los “*folios de vida originales de los años 2002 a 2003*” del demandante, goza de reserva legal frente a terceros y, por ende, debe garantizarse el tratamiento de confidencialidad previsto en la ley, de modo que una vez recibida se conformará una carpeta especial con el distintivo de carácter reservado, previa suscripción por parte del suscrito juez de la respectiva acta de traslado de la reserva legal, la cual quedará bajo la custodia personal de la autoridad judicial.

En consecuencia, se ordenará al Director de Personal del Ejército Nacional o a quien éste delegue que debe comparecer a las instalaciones de este juzgado a entregar los documentos confidenciales requeridos mediante auto de sustanciación No. 409 del 5 de julio de 2022, advirtiéndole que, además de los folios de vida originales del actor de los años 2002 a 2003, deberá allegar el acta de traslado de la reserva legal que firmará el juez.

De otra parte, en atención al informe secretarial que antecede, en el cual se da cuenta sobre el recaudo de la prueba documental requerida por auto de sustanciación No. 409 del 5 de julio de 2022, esto es, “... *fotos de los manuales que el demandante escribió durante el desempeño como oficial de aviación, entre ellos la guía para la adquisición de la central, el Manual para la Adquisición de Bienes y Servicios para la Central Administrativa y Contable Especializada Aviación, la Guía para la Inscripción y evaluación de Proveedores de la CENAC Especializada Aviación, el Manual de Procedimientos para la CENAC Aviación, la Primera Revista Digital VUELO CONTRACTUAL, el primer ALIC Archivo de Lectura de Interés Contractual, Álbum Institucional desde el Escritorio Salvamos Vidas...*”, se dispone su incorporación al proceso y se ordena que por Secretaría se corra traslado a las partes por el término común de tres (3) días, de conformidad con el artículo 110 del Código General del Proceso, con el fin de garantizar el principio de publicidad y el derecho de contradicción.

En consecuencia, se dispone:

1. ORDENAR al Director de Personal del Ejército Nacional o a quien éste delegue que debe comparecer a las instalaciones de este juzgado, ubicado en la Carrera 57 No. 43-91, Piso 5°, de esta ciudad, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), a la diez de las mañana (10:00 am), y hacer entrega, en calidad de préstamo, de los documentos confidenciales requeridos mediante auto de sustanciación No. 409 del 5 de julio de 2022, esto es, los folios de vida originales del MY. Nelson Cristóbal Ramos Martínez correspondientes a los años 2002 a 2003, advirtiéndole que, además de tal documentación, deberá traer consigo el acta de traslado de la reserva legal que firmará el suscrito juez.
2. ORDENAR a la Secretaría que con los documentos confidenciales se conforme una carpeta especial, con el distintivo de carácter reservado, la cual quedará bajo la custodia personal del suscrito juez.
3. INCORPORAR y dar traslado a las partes por el término común de tres (3) días de la prueba documental allegada por el apoderado de la parte demandante, obrante en medio magnético visto a folio 1473 del informativo, de conformidad con el artículo 110 del Código

General del Proceso, con el fin de garantizar el principio de publicidad y el derecho de contradicción.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

KPG

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **97826504b9aedc598e0ccc2f68c22e87bcd7526b500401f0e4cf2f5e1f98866e**
Documento generado en 20/09/2022 02:55:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>